

No. 28374

**SPAIN
and
PORTUGAL**

**Convention for the avoidance of double taxation with respect
to taxes on income. Signed at Madrid on 29 May 1968**

Authentic texts: Spanish and Portuguese.

Registered by Spain on 20 September 1991.

**ESPAGNE
et
PORTUGAL**

**Convention visant à éviter la double imposition eu matière
d'impôt sur le revenu. Signé à Madrid le 29 mai 1968**

Textes authentiques : espagnol et portugais.

Enregistrée par l'Espagne le 20 septembre 1991.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERÍA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA

El Jefe del Estado español y el Presidente de la República portuguesa, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, han designado a tal efecto como Plenipotenciarios:

El Jefe del Estado español:

al Excelentísimo Señor Don Fernando María Castiella y Maiz, Ministro de Asuntos Exteriores.

El Presidente de la República portuguesa:

al Excelentísimo Señor Profesor Doctor Luis da Camara Pinto-Coelho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Portugal en España.

los cuales, después de haber canjeado sus Plenipotencias y haberlas encontrado en buena y debida forma, han acordado lo siguiente:

Capítulo I

Ambito de aplicación del Convenio

Artículo 1-: Ambito personal

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

Artículo 2º: Ambito objetivo

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes y de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

2. Se consideraran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta, o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las plus-valías.

3. Los impuestos actuales a los que, concretamente, se aplica este Convenio, son:

a) en España:

- 1) el Impuesto general sobre la Renta de las Personas Físicas;
- 2) el Impuesto general sobre la Renta de Sociedades y demás entidades jurídicas, con inclusión del gravamen especial del 4% establecido por el artículo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de Junio;
- 3) los siguientes impuestos a cuenta: la Contribución Territorial sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial sobre la Riqueza Urbana, el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales;
- 4) en Guinea Ecuatorial, Sahara e Ifni, los impuestos sobre la renta (sobre los rendimientos del trabajo y del patrimonio) y sobre el beneficio de las empresas;

- 5) para las empresas reguladas por la Ley de 26 de diciembre de 1958 que se dedican a la investigación y explotación de hidrocarburos, además de a los otros impuestos enumerados en este apartado, al canon de superficie, al impuesto sobre el producto bruto y al impuesto especial sobre los beneficios de dichas sociedades;
- 6) los impuestos locales sobre la renta.
(Los que, en lo sucesivo, se denominan "impuesto español").

b) en Portugal:

- 1) la contribución territorial;
- 2) el impuesto sobre las industrias agrícolas;
- 3) la contribución industrial;
- 4) el impuesto sobre las rentas del capital;
- 5) el impuesto profesional;
- 6) el impuesto para la defensa y desarrollo de los territorios de ultramar;
- 7) el impuesto de plus-valías;
- 8) el impuesto complementario;
- 9) los impuestos adicionales a los mencionados anteriormente;
- 10) los impuestos exigidos por las entidades locales que se determinen en función de los impuestos enumerados en los apartados 1) a 8) y los adicionales correspondientes.
(Los que, en lo sucesivo, se denominan "impuesto portugués").

4. El presente Convenio se aplicará también a los impuestos futuros de naturaleza idéntica o análoga que se añadan a los actuales o que los sustituyen.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán al principio de cada año las modificaciones que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales, en el año precedente.

Capítulo II

Definiciones

Artículo 3º: Definiciones generales

1. En el presente Convenio, a menos que de su texto se infiera una interpretación diferente:
 - a) las expresiones "un Estado contratante" y "el otro Estado contratante" significan España o Portugal según se derive del texto.
 - b) la expresión "España" designa el territorio peninsular e insular, Ceuta y Melilla, la Guinea Ecuatorial, Sahara e Ifni;
 - c) la expresión "Portugal" designa a "Portugal europeo" y comprende, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 de este Convenio, el territorio del continente y los archipiélagos de Azores y de Madeira;
 - d) el término "persona" comprende las personas físicas y las sociedades.

- e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
- f) las expresiones "empresa de un Estado contratante" y "empresa del otro Estado contratante" significan respectivamente una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante.

g) la expresión "autoridad competente" significa:

1) En España:

El Ministro de Hacienda, el Director General de Impuestos Directos y cualquier otra autoridad en quien el Ministro delegue.

2) En Portugal:

El Ministro de Hacienda, el Director General de Contribuciones e Impuestos y cualquier otra autoridad en quien el Ministro delegue.

2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado contratante, cualquier expresión no definida de otra manera tendrá, a menos que el texto exija una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio.

Artículo 4: Domicilio fiscal

1. A los efectos del presente Convenio, se considera "residente de un Estado contratante" a toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en él por ra-

zón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona física resulte residente de ambos Estados contratantes, el caso se resolverá según las siguientes reglas:

a) Esta persona será considerada residente del Estado contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) Si no pudiera determinarse el Estado contratante en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante donde viva de manera habitual;

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados contratantes o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado contratante del que sea nacional;

d) Si fuera nacional de ambos Estados contratantes o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona, que no sea una persona física, sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

Artículo 5-: Establecimiento permanente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios en el que una empresa efectúe toda o parte de su actividad.

2. La expresión " establecimiento permanente" comprende, en especial:

- a) las sedes de dirección;
- b) las sucursales;
- c) las oficinas;
- d) las fábricas;
- e) los talleres;
- f) las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales;
- g) las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda de doce meses;

3. El término "establecimiento permanente" no comprende:

- a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar mercancías pertenecientes a la empresa;
- b) el mantenimiento de un depósito de mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
- c) el mantenimiento de un depósito de mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

- d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar mercancías o de recoger información para la empresa;
- e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o desarrollar otras actividades similares que tengan carácter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades se realicen para la propia empresa.

4. Una persona que actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro Estado contratante, salvo que se trate de un agente independiente comprendido en el párrafo 5, se considera que constituye establecimiento permanente en el Estado primeramente mencionado si tiene y ejerce habitualmente en este Estado poderes para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades se limiten a la compra de bienes o mercancías para la misma.

5. No se considera que una empresa de un Estado contratante tiene establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que realice actividades en este otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general, o cualquier otro mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

6. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante o que realice actividades en este —

otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera) no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

Capítulo III

Imposición sobre la renta

Artículo 6: Rentas de los bienes inmuebles

1. Las rentas procedentes de los bienes inmuebles pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que tales bienes estén situados.

2. La expresión "bienes inmuebles" se definirá de acuerdo con el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los accesorios, el ganado y equipo utilizados en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a la propiedad territorial, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir cánones variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes u otras riquezas del suelo. Los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. Esta disposición se aplica, asimismo, a las rentas derivadas de los bienes que, de acuerdo con la legislación fiscal del Estado contratante en que los

bienes estén situados, se asimilan a las rentas derivadas de bienes - inmuebles.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de las empresas y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios - profesionales.

Artículo 7: Beneficios de las empresas

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa efectúe operaciones en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En este último caso, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuírse al establecimiento permanente.

2. Cuando una empresa de un Estado contratante realice negocios en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán - al establecimiento permanente los beneficios que éste obtendría si - fuese una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y trata - se con total independencia con la empresa de la que es establecimien - to permanente.

3. Para la determinación del beneficio del establecimien - to permanente se permitirá la deducción de los gastos para los fines del establecimiento permanente, debidamente demostrados, comprendi - dos los gastos de dirección y generales de administración para los

mismos fines, igualmente demostrados, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente o en otra parte.

4. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.

5. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Artículo 8: Navegación marítima, interior y aérea

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

2. Los beneficios de la explotación de embarcaciones dedicadas a la navegación interior sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación marítima o de una empresa dedicada a la navegación interior estuviera a bordo de un buque o embarcación, se considerará que se encuentra en el Estado contratante donde esté el puerto base de los mismos, y, si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante en el que resida la persona que explota el buque o la embarcación.

4. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de un "pool", de una explotación en común o de un organismo internacional de explotación.

Artículo 9: Empresas asociadas

Cuando

a) una empresa de un Estado contratante participe, directa o indirectamente, en la dirección, control o capital de una empresa del otro Estado contratante,

o

b) unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, control o capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,

y, en uno y otro caso, las dos empresas estén en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones, aceptadas o impuestas, que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas habría obtenido de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

Artículo 10: Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.

2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que pague — los dividendos y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del:

- a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario de estos es una sociedad que tenga directamente, como mínimo, el 50 por ciento del capital social de la sociedad que paga los dividendos, con tal que esta participación esté representada por acciones o partes sociales poseídas desde, como mínimo, un año antes de la fecha de la distribución.
- b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos, en todos los demás casos.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán, de mutuo acuerdo, la forma de aplicar estos límites.

Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad por los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.

3. El término "dividendos", empleado en el presente artículo, comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las acciones de fundador o de otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que las distribuya.

A los efectos de este Convenio, la tributación de las - incorporaciones de reservas al capital social de las sociedades se registrará por las disposiciones de este artículo.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente de un Estado contratante, tiene, en el otro Estado contratante de que es residente la - sociedad que paga los dividendos, un establecimiento permanente con el que la participación que genere los dividendos esté vinculada — efectivamente. En este caso se aplican las disposiciones del artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtiene beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, este otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad a personas que no sean residentes de este último Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de este otro Estado.

Artículo 11: Intereses

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.

2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 15 % del importe de los intereses.

Las autoridades competentes de los Estados ocntratantes esta blecerán, de mutuo acuerdo, la forma de aplicar este límite.

3. Los rendimientos de la Deuda Pública de uno de los Estados ocntratantes sólo podrán someterse a imposición en este Estado.

4. El término "intereses", empleado en este artículo, comprende los rendimientos de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en benefi cios, y de los créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intg reses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo.

Las cantidades que se paguen a una empresa en concepto de indemnización por el cese o la reducción de sus actividades se asimi lan por la legislación fiscal portuguesa a las rentas derivadas de - préstamos.

5. Las disposiciones de los párrafcs 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un Estado ocntratante, tie ne, en el otro Estado ocntratante del que proceden los intereses, un establecimiento permanente ocn el que el crédito que genera los inta reses esté vinculado efectivamente. En este caso se aplican las dis posiciones del artículo 7.

6. Los intereses se oonsideran procedentes de un Estado ocn tratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus entidades loca les o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el deudor de los inte reses sea o no residente de un Estado ocntratante, tenga en un Estado - ocntratante un establecimiento permanente en relación con el cual se — haya contraído la deuda que da origen a los intereses y este estableci

miento soporte el pago de los mismos, los intereses se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté el establecimiento permanente.

7. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de los intereses o entre ambos y cualquier otra persona, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

Artículo 12: Cánones

1. Los cánones procedentes de un Estado contratante pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este último Estado.

2. Sin embargo, estos cánones pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán, de mutuo acuerdo, la forma de aplicar este límite.

3. El término "cánones", empleado en este artículo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas de

fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los cánones, residente de un Estado contratante, tiene, en el otro Estado contratante del cual proceden los cánones, un establecimiento permanente con el cual el derecho o propiedad por que se pagan los cánones esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7.

5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus entidades locales o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente al cual está vinculada la prestación por la que se pagan los cánones y este establecimiento soporte el pago de los mismos, los cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento permanente.

6. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de los cánones o entre ambos y cualquier otra persona, el importe de los cánones pagados, habida cuenta de la prestación por la que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a impo_

sición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

Artículo 13: Ganancias de capital

1. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que estén situados.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante para la prestación de servicios profesionales, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación del establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) o de la base fija, podrán someterse a imposición en este otro Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de buques y aeronaves dedicados al tráfico internacional y de las embarcaciones dedicadas a la navegación interior así como de los bienes muebles afectos a su explotación, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos 1 y 2, sólo pueden someterse a imposición en el Estado en que reside el transmitente.

4. Las disposiciones de este artículo no impiden que Portugal pueda exigir el impuesto de plus-valía, en vigor en la fecha de la firma del presente Convenio, respecto a la emisión de acciones con derecho preferente de suscripción para los socios de sociedades que tengan su sede o dirección efectiva en Portugal.

Artículo 14: Profesiones independientes

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante por la prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades independientes de naturaleza análoga, sólo pueden someterse a imposición en este Estado a no ser que dicho residente disponga de manera habitual en el otro Estado contratante de una base fija para el ejercicio de su actividad. En este último caso, dichas rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que proceda atribuirles a la base fija.

2. La expresión "servicios profesionales" comprende, especialmente, las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, de educación o enseñanza, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

Artículo 15: Trabajo dependiente

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 22, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el

empleo se ejerce en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en este Estado.

2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, y con las reservas que en él se mencionan, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:

- a) el empleado no permanece en el otro Estado, en uno o varios períodos, más de un total de 183 días durante el año fiscal considerado, y
- b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una persona para quien se trabaje que no es residente del otro Estado, y
- c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que la persona para quien se trabaje tiene en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional, o a bordo de una embarcación dedicada a la navegación interior, pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde se encuentre la sede de dirección efectiva de la Empresa.

4. Las remuneraciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo cuando se perciban por personas que residan en los términos municipales de un Estado contratante, limítrofes del otro Estado contratante, y trabajen en este último Estado, en los términos municipa

los límites del primero, que se desplacen diariamente del lugar de residencia al lugar de trabajo (trabajadores fronterizos) sólo pueden someterse a imposición en el Estado de residencia.

Artículo 16: Participaciones de consejeros

Las participaciones, dietas de asistencia, y retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtiene como miembro de un Consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en este otro Estado, siempre que tales remuneraciones se fijen y paguen por la sociedad por su participación en las actividades del Consejo de administración o de vigilancia. En otro caso se aplicarán las disposiciones del artículo 15.

Artículo 17: Artistas y deportistas

No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las rentas obtenidas por los profesionales del espectáculo, tales como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión y los músicos, así como por los deportistas, por sus actividades profesionales en este concepto, pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde actúen.

Artículo 18: Pensiones

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 19, las pensiones y remuneraciones similares pagadas, en consideración a un empleo anterior, a un residente de un Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

Artículo 19: Funciones públicas

1. Las remuneraciones, incluidas las pensiones, pagadas directamente o con cargo a un fondo especial, por un Estado contratante o una de sus entidades locales a una persona física en consideración a servicios prestados a ese Estado o entidad local, en el ejercicio de funciones públicas, pueden someterse a imposición en este Estado.

2. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas por servicios prestados en relación con las actividades comerciales o industriales ejercidas por uno de los Estados contratantes o una de sus entidades locales.

Artículo 20: Agentes mediadores

1. Las rentas que un agente mediador, residente de un Estado contratante, obtenga por la prestación de los servicios típicos de su actividad, solamente podrán ser sometidas a imposición en este Estado a menos que realice operaciones en el otro Estado contratante — por medio de un establecimiento permanente o de una base fija situados en este último. En este caso, las rentas que obtenga pueden ser sometidas a imposición en este otro Estado pero sólo en la medida en que sean imputables al establecimiento permanente o, en su caso, a la base fija.

2. Con el término "agente mediador" se designa a toda persona que, bajo un estatuto independiente y mediante remuneración, trata de facilitar transacciones entre otras partes.

Artículo 21: Profesores

Los profesores que sean o hayan sido inmediatamente antes residentes de un Estado contratante y que perciban remuneraciones por la enseñanza en una universidad, colegio, escuela u otro establecimiento de enseñanza del otro Estado contratante, por un período de residencia temporal que no exceda de dos años, estarán exentos de impuestos en este último Estado por dichas remuneraciones, siempre que tales establecimientos pertenezcan al Estado o a una persona jurídica — sin fines lucrativos y si las referidas remuneraciones no se someten a imposición en el primer Estado.

Artículo 22: Estudiantes

1. Las cantidades que un estudiante o una persona en prácticas, que sea o haya sido inmediatamente antes residente de un Estado contratante y que se encuentre en el otro Estado contratante con el único fin de proseguir sus estudios o completar su formación, reciba para sufragar sus gastos de mantenimiento, estudios o formación, no se someterán a imposición en el Estado últimamente citado, siempre que tales cantidades procedan de fuentes de fuera de este Estado.

2. Los estudiantes de una universidad o de otro establecimiento de enseñanza superior o técnica de un Estado contratante que desempeñen un empleo en el otro Estado contratante con el fin de obtener una formación práctica en relación con sus estudios no serán sometidos a imposición en este último Estado por las remuneraciones que obtengan por dicho empleo siempre que la duración de éste no exceda de 183 días, durante el año fiscal considerado.

Artículo 23: Rentas no mencionadas expresamente

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante no mencionadas expresamente en los artículos anteriores, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, las rentas pagadas al participante no gestor en una cuenta en participación serán sometidas a imposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.

Capítulo IVArtículo 24: Método para evitar la doble imposición

La doble imposición se evitará de la siguiente manera:

En España:

- a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en Portugal, España deducirá del impuesto sobre la renta de este residente una cantidad igual al impuesto pagado en Portugal. Sin embargo esta deducción no puede exceder de la parte del impuesto español, computado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que hayan sido sometidas a imposición en Portugal. El impuesto pagado en Portugal se deducirá también de los impuestos españoles a cuenta, de acuerdo con las disposiciones de este párrafo.
- b) Los beneficios que obtenga un establecimiento permanente situado en Portugal perteneciente a un residente de España estarán exentos en España, pero para calcular el impuesto correspondiente a las restantes rentas de este residente, España puede aplicar el tipo impositivo que correspondería sin esta exención.

Las disposiciones de este apartado no se aplican a los establecimientos permanentes cuyos beneficios están constituidos, única o principalmente, por rentas a que se refieren los artículos 10 y 11; en este caso se aplican las disposiciones del apartado a) anterior del — presente artículo.

En Portugal:

Cuando un residente en Portugal obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en España, Portugal deducirá del impuesto sobre la renta de este residente una cantidad igual al impuesto pagado en España por — esas rentas.

Sin embargo, la cantidad deducida no puede exceder de la menor de las dos cantidades siguientes:

- a) La parte del impuesto español correspondiente a la parte de renta sometida a imposición en Portugal;
- b) La parte del impuesto portugués sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas sometidas a imposición en España.

Capítulo V

Disposiciones especiales

Artículo 25: No discriminación

1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este último Estado que se encuentren en las mismas condiciones.

2. El término "nacionales" significa:
- a) todas las personas físicas que posean la nacionalidad de un Estado contratante;
 - b) todas las personas jurídicas y asociaciones, constituidas con arreglo a las leyes vigentes en un Estado contratante.
3. Un establecimiento permanente que una empresa de un estado contratante tenga en el otro Estado contratante no será sometido a imposición en este Estado de manera menos favorable que las empresas de este último Estado que realicen las mismas actividades.
- Esta disposición no obliga a un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones de impuestos que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
4. Las empresas de un Estado contratante, cuyo capital esté, en todo o en parte, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o más residentes del otro Estado contratante, no serán sometidas en el Estado contratante citado en primer lugar a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosas que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidas las empresas similares del primer Estado.
5. El presente artículo es de aplicación a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza y denominación.

Artículo 26: Procedimiento amistoso

1. Cuando un residente de un Estado contratante considere que las medidas tomadas por uno o ambos Estados contratantes implican o puedan implicar para él un gravamen que no esté conforme con el presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por la legislación nacional de los Estados, podrá cometer su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que es residente.

La petición debe presentarse dentro del período de dos años, contados desde la comunicación o notificación de la última imposición, o en el caso de impuestos percibidos en la fuente, desde el momento de su ingreso en el Tesoro.

2. Esta autoridad competente, si la reclamación le parece — fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar la imposición que no se ajuste a este Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes — harán lo posible por resolver mediante acuerdo amistoso las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del presente Convenio.

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de lograr los acuerdos a que se refieren los párrafos anteriores. Cuando se considere que estos acuerdos pueden facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista podrá realizarse en el seno de una co-

misión compuesta por representantes de las autoridades competentes de ambos Estados contratantes.

Artículo 27: Intercambio de información

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes - intercambiarán las informaciones necesarias para la aplicación del presente Convenio y de las leyes internas de los Estados contratantes relativas a los impuestos comprendidos en el mismo, que se exijan de acuerdo con él. Las informaciones así intercambiadas serán mantenidas secretas y no se podrán revelar a ninguna persona o autoridad que no esté encargada de la liquidación o recaudación de los impuestos objeto del presente Convenio.

2. En ningún caso, las disposiciones del párrafo 1 obligan a un Estado contratante a:

- a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;
- b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o práctica administrativa normal o de las del otro Estado contratante;
- c) transmitir informaciones que revelen un secreto comercial, industrial, de negocios o profesional o un procedimiento comercial o industrial, o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Artículo 28: Funcionarios diplomáticos y consulares

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales que disfrutaban los funcionarios diplomáticos o consu

lares de acuerdo con los principios generales del Derecho internacional o en virtud de disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 29: Extensión territorial

1. El presente Convenio podrá extenderse, en su forma actual o con las modificaciones necesarias, a parte o a todo el territorio de Portugal que ha sido excluido del ámbito de aplicación del Convenio y que exija impuestos de carácter análogo a los comprendidos en el mismo. La extensión será efectiva a partir de la fecha y con las modificaciones y condiciones (incluidas las relativas a la cesación de su aplicación), que se fijan de común acuerdo entre los Estados contratantes por el intercambio de notas diplomáticas o por cualquier otro procedimiento que se ajuste a sus respectivas normas constitucionales.

2. A menos que los Estados contratantes convergan otra cosa, la denuncia de este Convenio por uno de ellos, según lo dispuesto en el artículo 31, pondrá fin a la aplicación de sus disposiciones, en las condiciones previstas en dicho artículo, a todo el territorio al que se hubiera hecho extensivo de conformidad con este artículo.

Capítulo VI

Disposiciones finales

Artículo 30: Entrada en vigor

1. El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Lisboa lo más pronto posible.

2. Este Convenio entrará en vigor un mes después del intercambio de los instrumentos de ratificación y sus disposiciones se aplicarán:

En España:

A los impuestos devengados el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor del Convenio o con posterioridad a esta fecha.

En Portugal:

a) A los impuestos percibidos en la fuente, cuyo devengo se produzca el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor del Convenio o con posterioridad a esta fecha.

b) A los demás impuestos relativos a las rentas obtenidas el 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor del Convenio o con posterioridad a esta fecha.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 anterior, las disposiciones del artículo 8, en lo que se refiere a las compañías de navegación aérea se aplicarán a los impuestos correspondientes a las rentas obtenidas a partir del 1 de enero de 1963.

Artículo 31: Denuncia

El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por alguno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar el Convenio por vía diplomática con un preaviso mínimo de seis meses antes del fin de cada año civil. En este caso, el Convenio dejará de aplicarse:

En España:

A los impuestos devengados el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se haya notificado la denuncia o con posterioridad a esta fecha.

En Portugal:

a) A los impuestos percibidos en la fuente cuyo devengo se produzca el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se haya notificado la denuncia, o con posterioridad a esta fecha.

b) A los demás impuestos relativos a las rentas obtenidas el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se haya notificado la denuncia o con posterioridad a esta fecha.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios nombrados han firmado y sellado este Convenio.

HECHO en Madrid, por duplicado, en idiomas español y portugués, haciendo fe ambos textos igualmente, el veintinueve de Mayo de mil novecientos sesenta y ocho.

Por el Gobierno
español:

[Signed — Signé]

FERNANDO MARÍA CASTIELLA

Por el Gobierno
portugués:

[Signed — Signé]

LUIS DA CAMARA PINTO-COELHO

[PORTUGUESE TEXT — TEXTE PORTUGAIS]

CONVENÇÃO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE O
RENDIMENTO

O Presidente da República Portuguesa e o Chefe do Estado espanhol, desejando concluir uma Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento,

designaram para tal efeito como plenipotenciários:

O Presidente da República Portuguesa:

Sua Excelência o Professor Doutor Luís da Câmara Pinto Coelho, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário,

O Chefe do Estado espanhol:

Sua Excelência o Doutor Fernando María Castiella y Maiz, Ministro de Assuntos Exteriores espanhol,

os quais, depois de haverem trocado os seus plenos poderes e os terem achado em boa e devida forma, acordaram nas disposições seguintes:

CAPÍTULO I

Âmbito da aplicação da Convenção

ARTIGO 1º.

(Pessoas visadas)

Esta Convenção aplica-se às pessoas residentes de um ou de ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO 2º.

(Impostos visados)

1. Esta Convenção aplica-se aos impostos sobre o rendimento exigidos por cada um dos Estados Contratantes e suas autarquias locais, seja qual for o sistema usado para a sua percepção.

2. São considerados impostos sobre o rendimento os impostos incidentes sobre o rendimento total, ou sobre parcelas do rendimento, incluídos os impostos sobre os ganhos derivados da alienação de bens mobiliários ou imobiliários, bem como os impostos sobre as mais-valias.

3. Os impostos actuais a que esta Convenção se aplica são, nomeadamente:

a) Relativamente à Espanha:

1º. O imposto geral sobre o rendimento das pessoas singulares;

2º. O imposto geral sobre o rendimento das sociedades e demais pessoas colectivas, incluindo o imposto especial de 4% estabelecido pelo artigo 104º. da Lei 41/1964, de 11 de Junho;

- 3^o. Os seguintes impostos por conta. a contribuição territorial sobre a riqueza rústica e pecuária, a contribuição territorial sobre a riqueza urbana, o imposto sobre os rendimentos do trabalho pessoal, o imposto sobre os rendimentos do capital e o imposto sobre actividades e lucros comerciais e industriais;
 - 4^o. Na Guiné Equatorial, Saará e Ifni, os impostos sobre o rendimento (sobre os rendimentos do trabalho e do património) e sobre o lucro das empresas;
 - 5^o. Quanto às empresas reguladas pela Lei, de 26 de Dezembro de 1958, que se dedicam à pesquisa e exploração de hidrocarbonetos, o "canon" da superfície, o imposto sobre o produto bruto e o imposto especial sobre os lucros das referidas sociedades, além dos outros impostos enumerados nesta alínea;
 - 6^o. Os impostos locais sobre o rendimento.
a seguir referidos pela designação de "imposto espanhol".
- b) Relativamente a Portugal:
- 1^o. A contribuição predial;
 - 2^o. O imposto sobre a indústria agrícola;
 - 3^o. A contribuição industrial;
 - 4^o. O imposto de capitais;
 - 5^o. O imposto profissional;

- 6^ª. O imposto para a defesa a valorização do Ultramar;
 - 7^ª. O imposto de mais-valias;
 - 8^ª. O imposto complementar;
 - 9^ª. Os adicionais dos impostos 1^ª. a 8^ª. desta alínea;
 - 10^ª. Os impostos estabelecidos para as autarquias locais, cujo quantitativo seja determinado em função dos impostos 1^ª. a 8^ª. desta alínea e os respectivos adicionais,
- a seguir referidos pela designação de "imposto português".

4. A Convenção será também aplicável aos impostos futuros de natureza idêntica ou similar que venham a acrescer aos actuais ou a substituí-los. As autoridades competentes dos Estados Contratantes comunicarão uma à outra, no princípio de cada ano, as modificações introduzidas nas respectivas legislações fiscais, no ano anterior.

CAPITULO II

Definições

ARTIGO 3^ª.

(Definições gerais)

1. Nesta Convenção, a não ser que o contexto exija interpretação diferente:

- a) As expressões "um Estado Contratante" e "o outro Estado Contratante" significam a Espanha ou Portugal, consoante resulte do contexto;

- b) o termo "Espanha" significa o território peninsular e insular, Ceuta, Melilla, a Guiné Equatorial, Saará e Ifni;
- c) o termo "Portugal" significa Portugal europeu, que compreende, sem prejuízo do disposto no artigo 29º. desta Convenção, o território do Continente e os Arquipélagos dos Açores e da Madeira;
- d) o termo "pessoa" compreende as pessoas singulares e as sociedades;
- e) o termo "sociedade" significa qualquer pessoa colectiva ou qualquer entidade que é tratada como pessoa colectiva para fins tributários;
- f) As expressões "empresa de um Estado Contratante" e "empresa do outro Estado Contratante" significam, respectivamente, uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante e uma empresa explorada por um residente do outro Estado Contratante;
- g) A expressão "autoridade competente" significa:
- 1º. Relativamente à Espanha:
O Ministro da Fazenda, o Director-Geral dos Impostos Directos e qualquer outra autoridade em quem o Ministro delegue;
 - 2º. Relativamente a Portugal:
O Ministro das Finanças, o Director-Geral das Contribuições e Impostos e qualquer outra autoridade em quem o Ministro delegue.

2. Para a aplicação desta Convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão não definida de outro modo terá, a não ser que o contexto exija interpretação diferente, o significado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante relativa aos impostos que são objecto desta Convenção.

ARTIGO 4.^o

(Domicílio fiscal)

1. Para efeitos desta Convenção, considera-se "residente de um Estado Contratante" qualquer pessoa que, por virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto, devido ao seu domicílio, à sua residência, ao local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar.

2. Quando, por virtude do disposto no n.^o 1, uma pessoa singular for residente de ambos os Estados Contratantes, a situação será resolvida de acordo com as seguintes regras:

- a) Será considerada residente do Estado Contratante em que tenha uma habitação permanente à sua disposição. Se tiver uma habitação permanente à sua disposição em ambos os Estados Contratantes, será considerada residente do Estado Contratante com o qual sejam mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (centro de interesses vitais);
- b) Se o Estado Contratante em que tem o centro de interesses vitais não puder ser determinado, ou se não tiver uma habitação permanente à sua disposição em nenhum dos Estados Contratantes, será con-

sidarada residente do Estado Contratante em que permanece habitualmente;

- c) Se permanecer habitualmente em ambos os Estados Contratantes ou se não permanecer habitualmente em nenhum deles, será considerada residente do Estado Contratante de que for nacional;
- d) Se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou se não for nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolverão o caso de comum acordo.

3. Quando, por virtude do disposto no nº. 1, uma pessoa, que não seja uma pessoa singular, for residente de ambos os Estados Contratantes, será considerada residente do Estado Contratante em que estiver situada a sua direcção efectiva.

ARTIGO 5º.

(Estabelecimento estável)

1. Para efeitos desta Convenção, a expressão "estabelecimento estável" significa uma instalação fixa onde a empresa exerça toda ou parte da sua actividade.

2. A expressão "estabelecimento estável" compreende nomeadamente:

- a) Um local de direcção;
- b) Uma sucursal;
- c) Um escritório;
- d) Uma fábrica;
- e) Uma oficina;

- f) Uma mina, uma pedreira ou outro local de extração de recursos naturais;
- g) Um local ou um estaleiro de construção ou de montagem cuja duração exceda doze meses.
3. A expressão "estabelecimento estável" não compreende:
- a) As instalações utilizadas unicamente para armazenar, expor ou entregar mercadorias pertencentes à empresa;
- b) Um depósito de mercadorias pertencentes à empresa mantido unicamente para as armazenar, expor ou entregar;
- c) Um depósito de mercadorias pertencentes à empresa mantido unicamente para serem transformadas por outra empresa;
- d) Uma instalação fixa mantida unicamente para comprar mercadorias ou reunir informações para a empresa;
- e) Uma instalação fixa mantida unicamente para fazer publicidade, fornecer informações, realizar investigações científicas ou desenvolver outras actividades similares que tenham carácter preparatório ou auxiliar, sempre que estas actividades sejam exercidas para a própria empresa.
4. Uma pessoa que actue num Estado Contratante por conta de uma empresa do outro Estado Contratante, desde que não seja um agente independente a que é aplicável o nº. 5, será considerada como estabelecimento estável da empresa no Estado principalmente mencionado se tiver e exercer habitualmente neste Estado

poderees para concluir contratos em nome da empresa, a não ser que a actividade dessa pessoa se limite à compra de mercadorias para a empresa.

5. Não se considera que uma Empresa de um Estado Contratante tem um estabelecimento estável no outro Estado Contratante pelo simples facto de exercer a sua actividade nesse outro Estado por intermédio de um corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro agente independente, desde que essas pessoas actuem no âmbito normal da sua actividade.

6. O facto de uma sociedade residente de um Estado Contratante controlar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante ou que exerce a sua actividade nesse ou outro Estado, quer seja através de um estabelecimento estável, quer de outro modo, não é, por si, bastante para fazer de qualquer dessas sociedades estabelecimento estável da outra.

CAPÍTULO III

Tributação dos rendimentos

ARTIGO 6º.

(Rendimentos dos bens imobiliários)

1. Os rendimentos provenientes de bens imobiliários podem ser tributados no Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.

2. A expressão bens imobiliários é definida de acordo com o direito do Estado Contratante em que tais bens estiverem situados. A expressão compreende sempre os acessórios, o gado e o equi

pamento das explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se apliquem as disposições do direito privado relativas à propriedade de bens imóveis, o usufruto de bens imobiliários e os direitos a retribuições variáveis ou fixas pela exploração ou pela cessação da exploração de jazigos minerais, fontes e outros recursos naturais. Os navios, barcos e esplanas não são considerados bens imobiliários.

3. A disposição do nº. 1 aplica-se aos rendimentos derivados da utilização directa, do arrendamento ou de qualquer outra forma de utilização dos bens imobiliários. Essa disposição aplica-se igualmente aos rendimentos derivados dos bens que, de acordo com a legislação fiscal do Estado Contratante em que tais bens estiverem situados, sejam assimilados aos rendimentos derivados dos bens imobiliários.

4. O disposto nos nºs. 1 e 3 aplica-se igualmente aos rendimentos provenientes dos bens imobiliários de uma empresa e aos rendimentos dos bens imobiliários utilizados para o exercício de profissões liberais.

ARTIGO 7º.

(Lucros das empresas)

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua actividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento estável aí situado. Se a empresa exercer a sua actividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no outro Estado mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse estabelecimento estável.

2. Quando uma empresa de um Estado Contratante exercer a sua actividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento estável aí situado, serão imputados, em cada Estado Contratante, a esse estabelecimento estável os lucros que este obteria se fosse uma empresa distinta e separada que exercesse as mesmas actividades ou actividades similares, nas mesmas condições ou em condições similares e tratasse com absoluta independência com a empresa de que é estabelecimento estável.

3. Na determinação do lucro de um estabelecimento estável é permitido deduzir as despesas, devidamente comprovadas, que tiverem sido feitas para realização dos fins prosseguidos por esse estabelecimento estável, incluindo as despesas de direcção e as despesas gerais de administração, igualmente comprovadas e efectuadas com o fim referido, quer no Estado em que esse estabelecimento estável estiver situado, quer fora dele.

4. Nenhum lucro será imputado a um estabelecimento estável pelo facto da simples compra de mercadorias, por esse estabelecimento estável, para a empresa.

5. Quando os lucros compreendam elementos do rendimento especialmente tratados noutros artigos desta Convenção, as respectivas disposições não serão afectadas pelas deste artigo.

ARTIGO 82.

(Navegação marítima, interior e aérea)

1. Os lucros provenientes da exploração de navios ou aeronaves no tráfego internacional só podem ser tributados no Estado Contratante em que estiver situada a direcção efectiva da empresa.

2. Os lucros provenientes da exploração de barcos utilizados na navegação interior só podem ser tributados no Estado Contratante em que estiver situada a direcção efectiva da empresa.

3. Se a direcção efectiva de uma empresa de navegação marítima ou de uma empresa de navegação interior se situar a bordo de um navio ou de um barco, a direcção efectiva considera-se situada no Estado Contratante em que se encontra o porto onde esse navio ou barco estiverem registados, ou, na falta de porto de registo, no Estado Contratante de que é residente a pessoa que explora o navio ou o barco.

4. O disposto no nº. 1 aplica-se igualmente aos lucros de uma empresa de um Estado Contratante provenientes de um "pool", de uma exploração em comum ou de um organismo internacional de exploração.

ARTIGO 9º.

(Empresas associadas)

Quando uma empresa de um Estado Contratante participar, directa ou indirectamente, na direcção, no controle ou no capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou as mesmas pessoas participarem, directa ou indirectamente, na direcção, no controle ou no capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, e, em ambos os casos, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou financeiras estiverem ligadas por condições aceites ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, se não existissem essas condições, teriam sido obtidos por

uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e, conseqüentemente, tributados.

ARTIGO 10º.

(Dividendos)

1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados neste último Estado.

2. Esses dividendos podem, no entanto, ser tributados no Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não excederá:

- a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o seu beneficiário for uma sociedade, que tenha direito, pelo menos 50 por cento do capital social da sociedade que paga os dividendos, desde que esta participação esteja representada por acções ou partes sociais possuídas pelo menos um ano antes da data da distribuição;
- b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos, nos restantes casos.

As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplicar estes limites.

Este número não afecta a tributação da sociedade pelos lucros dos quais os dividendos são pagos.

3. O termo "dividendos", usado neste artigo, significa os rendimentos provenientes de acções, acções ou bónus de fruição, partes de minas, partes de fundador ou outros direitos, com excepção dos créditos, que permitam participar nos lucros, assim como os rendimentos derivados de outras partes sociais assimila dos aos rendimentos das acções pela legislação fiscal do Estado de que é residente a sociedade que os distribui.

Para efeitos desta Convenção, a tributação da incorporação de reservas no capital social das sociedades será regulada pelas disposições deste artigo.

4. O disposto nos n.ºs. 1 e 2 não é aplicável se o beneficiário dos dividendos, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, um estabelecimento estável a que estiver efectivamente ligada a participação que dá origem aos dividendos. Neste caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.

5. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, este outro Estado não poderá exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade às pessoas não residentes deste último Estado, nem sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre os lucros não distribuídos, mesmo que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente, em lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.

ARTIGO 11.^o.

(Juros)

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados neste último Estado.

2. No entanto, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não excederá 15 por cento do montante dos juros. As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplicar este limite.

3. Os rendimentos da dívida pública de um dos Estados Contratantes só podem ser tributados nesse Estado.

4. O termo "juros", usado neste artigo, significa os rendimentos da dívida pública, de obrigações com ou sem garantia hipotecária e com direito ou não a participar nos lucros e de créditos de qualquer natureza, bem como quaisquer outros rendimentos assimilados aos rendimentos de importâncias emprestadas pela legislação fiscal do Estado de que provêm os rendimentos.

As importâncias pagas a uma empresa, a título de indemnização pela suspensão ou redução da sua actividade, são assimiladas pela legislação fiscal portuguesa aos rendimentos provenientes de empréstimos.

5. O disposto nos n.ºs. 1 e 2 não é aplicável se o beneficiário dos juros, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que provêm os juros, um estabelecimento está

vel a que estiver efectivamente ligado o crédito que da origem aos juros. Neste caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7º.

6. Os juros consideram-se provenientes de um Estado Contratante, quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua antarquia local ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos juros, seja ou não residente de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento estável em relação com o qual haja sido contraída a obrigação que dá origem aos juros e esse estabelecimento estável suporte o pagamento desses juros, tais juros são considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento estável estiver situado.

7. Quando, devido a relações especiais existentes entre o devedor e o credor ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o montante dos juros pagos, tendo em conta o crédito pelo qual são pagos, exceder o montante que seria acordado entre o devedor e o credor, na ausência de tais relações, as disposições deste artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Neste caso, o excesso pode continuar a ser tributado de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições desta Convenção.

ARTIGO 12º.

(“Redevances”)

1. As “redevances” provenientes de um Estado Contratante e pagas a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributadas neste último Estado.

2. Todavia, essas "redevances" podem ser tributadas no Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não excederá 5 por cento do montante bruto das "redevances". As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplicar este limite.

3. O termo "redevances", usado neste artigo, significa as retribuições de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica, incluindo os filmes cinematográficos, de uma patente, de uma marca de fabrico ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou de um processo secretos, bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico.

4. O disposto nos n.ºs. 1 e 2 não é aplicável se o beneficiário das "redevances", residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que provêm as "redevances", um estabelecimento estável a que estiver efectivamente ligado o direito ou o bem que dá origem às "redevances". Neste caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.

5. As "redevances" consideram-se provenientes de um Estado Contratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua autarquia local ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor das "redevances", seja ou não residente de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento estável em relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar as

"redevances" e esse estabelecimento estável suporte o pagamento dessas "redevances", tais "redevances" são consideradas provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento estável estiver situado.

6. Quando, devido a relações especiais existentes entre o devedor e o beneficiário das "redevances" ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o montante das "redevances" pagas, tendo em conta a prestação pela qual são pagas, exceder o montante que seria acordado entre o devedor e o beneficiário, na ausência de tais relações, as disposições deste artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Neste caso, o excesso pode continuar a ser tributado de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições desta Convenção.

ARTIGO 13^o.

(Mais-Valias)

1. Os ganhos provenientes da alienação dos bens imobiliários, conforme são definidos no artigo 6^o, podem ser tributados no Estado Contratante em que tais bens estiverem situados.

2^a. Os ganhos provenientes da alienação de bens mobiliários que façam parte do activo de um estabelecimento estável que uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante, ou de bens mobiliários afectos a uma instalação fixa de que um residente de um Estado Contratante disponha no outro Estado Contratante para o exercício de uma profissão liberal, incluindo os ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento estável, isolado ou com o conjunto da empresa, ou desta instalação fixa, podem ser tributados nesse outro Estado.

Os ganhos provenientes da alienação de navios e aeronaves utilizados no tráfego internacional e dos barcos utilizados na navegação interior, bem como dos bens mobiliários affectos à exploração desses navios, barcos ou aeronaves, só podem ser tributados no Estado Contratante em que estiver situada a direcção efectiva da empresa.

3. Os ganhos provenientes da alienação de quaisquer outros bens, diferentes dos mencionados nos n.ºs. 1 e 2, só podem ser tributados no Estado Contratante de que o alienante é residente.

4. As disposições deste artigo não impedem Portugal de exigir o imposto de mais-valias, em vigor à data da assinatura desta Convenção relativo à emissão de acções com reserva de preferência para os sócios de sociedades com sede ou direcção efectiva em Portugal.

ARTIGO 14.

(Profissões independentes)

1. Os rendimentos obtidos por um residente de um Estado Contratante pelo exercício de uma profissão liberal ou de outras actividades independentes de carácter similar só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que esse residente disponha, de forma habitual, no outro Estado Contratante, de uma instalação fixa para o exercício das suas actividades. Neste último caso, os rendimentos podem ser tributados no outro Estado Contratante, mas unicamente na medida em que sejam imputáveis a essa instalação fixa.

2. A expressão "profissões liberais" abrange em especial as actividades independentes de carácter científico, literário, artís-

tico, educativo ou pedagógico, bem como as actividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitectos, dentistas e contabilistas.

ARTIGO 15^o.

(Profissões dependentes)

1. Com ressalva do disposto nos artigos 16^o., 18^o., 19^o., 20^o., 21^o., e 22^o., os salários, ordenados e remunerações similares obtidos de um emprego por um residente de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que o emprego seja exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego for aí exercido, as remunerações correspondentes podem ser tributadas nesse outro Estado.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, e com as ressalvas nele estabelecidas, as remunerações obtidas por um residente de um Estado Contratante de um emprego exercido no outro Estado Contratante só podem ser tributadas no Estado primeiramente mencionado se:

- a) o beneficiário permanecer no outro Estado durante um período ou períodos que, no ano fiscal em causa, não excedam no total 183 dias; e
- b) As remunerações forem pagas por uma entidade patronal ou em nome de uma entidade patronal que não seja residente do outro Estado; e
- c) As remunerações não forem suportadas por um estabelecimento estável ou por uma instalação fixa que a entidade patronal tenha no outro Estado.

3. Não obstante as disposições anteriores deste artigo, as remunerações de um emprego exercido a bordo de um navio ou de uma aeronave em serviço no tráfego internacional, ou a bordo de um barco afecto à navegação interior, podem ser tributadas no Estado Contratante em que estiver situada a direcção efectiva da empresa.

4. As remunerações previstas no nº. 1 deste artigo auferidas por residentes de um Estado Contratante nos concelhos limitrofes do outro Estado Contratante que trabalham nesse outro Estado nos concelhos limitrofes do primeiro e se deslocam diariamente do local de residência para o local de trabalho (trabalhadores fronteiriços) só podem ser tributadas no Estado de que os beneficiários são residentes.

ARTIGO 16^o.

(Percentagens de membros do conselho)

As percentagens, senhas de presença e remunerações similares obtidas por um residente de um Estado Contratante na qualidade de membro do conselho de administração ou fiscal de uma sociedade residente do outro Estado Contratante podem ser tributadas nesse outro Estado, desde que tais remunerações sejam determinadas e pagas pela sociedade em virtude da sua participação nas actividades do conselho de administração ou fiscal. Caso contrário, são aplicáveis as disposições do artigo 15^o..

ARTIGO 17^a.**(Artistas e desportistas)**

Não obstante o disposto nos artigos 14^a. e 15^a., os rendimentos obtidos pelos profissionais de espectáculo, tais como artistas de teatro, cinema, rádio ou televisão e músicos, bem como pelos desportistas, provenientes das suas actividades pessoais exercidas nessa qualidade, podem ser tributados no Estado Contratante em que essas actividades foram exercidas.

ARTIGO 18^a.**(Pensões)**

Com ressalva do disposto no n.º 1 do artigo 19^a., as pensões e remunerações similares pagas a um residente de um Estado Contratante em consequência de um emprego anterior só podem ser tributadas nesse Estado.

ARTIGO 19^a.**(Funções públicas)**

1. As remunerações, incluindo as pensões, pagas por um Estado Contratante ou por uma das suas antarquias locais, quer directamente, quer através de fundos por eles constituídos, a uma pessoa singular em consequência de serviços prestados a esse Estado ou a essa antarquia, no exercício de funções públicas, podem ser tributadas nesse Estado.

2. O disposto nos artigos 15.^o, 16.^o e 18.^o aplica-se às remunerações e pensões pagas em consequência de serviços prestados em relação com uma actividade comercial ou industrial exercida por um dos Estados Contratantes ou por uma das suas autarquias locais.

ARTIGO 20.^o

(Agentes medidores)

1. Os rendimentos obtidos por um agente mediador, residente de um Estado Contratante da prestação de serviços, específicos da sua actividade só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que realize operações no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento estável ou de uma instalação fixa situados nesse último Estado. Neste caso, os rendimentos assim obtidos podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que sejam imputáveis a esse estabelecimento estável ou a essa instalação fixa.

2. A expressão "agente mediador" significa todas as pessoas que, sob um estatuto independente e mediante remuneração, se ocupem em facilitar transacções entre outras pessoas.

ARTIGO 21.^o

(Professores)

Os professores que são, ou foram imediatamente antes, residentes de um Estado Contratante e que no decurso de um período de residência temporária no outro Estado Contratante não excedente a dois anos, recebam remunerações pelo ensino numa universidade, num colégio, numa escola ou noutro estabelecimento de ensino desse outro Estado Contratante, não são neste tributados por tais remunerações.

rações, desde que os ditos estabelecimentos pertençam ao Estado ou a uma pessoa colectiva sem fins lucrativos e tais remunerações não sejam tributadas no primeiro Estado Contratante.

ARTIGO 22º.

(Estudantes)

1. As importâncias que um estudante ou um estagiário, que é, ou foi imediatamente antes, residente de um Estado Contratante e que permanece no outro Estado Contratante com o único fim de aí prosseguir os seus estudos ou a sua formação, receba para fazer face às despesas com a sua manutenção, estudos ou formação, não são tributadas nesse outro Estado, desde que provenham de fontes situadas fora dele.

2. Os estudantes de uma universidade ou outro estabelecimento de ensino superior ou técnico de um Estado Contratante que tenham um emprego no outro Estado Contratante com vista a obter uma formação prática relativa aos seus estudos não são tributados nesse outro Estado pelas remunerações desse emprego, desde que a respectiva duração, no ano fiscal em causa, não exceda 183 dias.

ARTIGO 23º.

(Rendimentos não expressamente mencionados)

1. Os elementos do rendimento de um residente de um Estado Contratante não expressamente mencionado nos artigos anteriores só podem ser tributados nesse Estado.

2. Não obstante o disposto no n.º 1 deste artigo, os rendimentos pagos ao participe de uma conta em participação são tributados de acordo com o disposto no artigo 10.º..

CAPITULO IV

Método para evitar a dupla tributação

ARTIGO 24.º.

A dupla tributação será evitada do modo seguinte:

1. Em Espanha

a) Quando um residente de Espanha obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Espanha deduzirá do imposto sobre o rendimento desse residente uma importância igual ao imposto pago em Portugal. A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fracção do imposto espanhol, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributados em Portugal. O imposto pago em Portugal deduzir-se-á também, de acordo com o disposto neste número, dos impostos espanhóis pagos por conta.

b) Os lucros obtidos por um estabelecimento estável situado em Portugal pertencente a um residente de Espanha serão isentos em Espanha, mas, para o cálculo de imposto sobre o restante rendimento desse residente, a Espanha poderá aplicar a taxa que lhe corresponderia se não existisse essa isenção.

O disposto nesta alínea não se aplicará aos estabelecimentos estáveis cujos lucros sejam constituídos, única ou principalmente, pelos rendimentos referidos nos artigos 10.º e 11.º;

neste caso será aplicável o disposto na anterior alínea a) do presente artigo.

2. Em Portugal:

Quando um residente de Portugal obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta Convenção, possam ser tributados em Espanha, Portugal deduzirá do imposto sobre o rendimento desse residente uma importância igual ao imposto sobre tais rendimentos pago em Espanha.

A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a menor das duas importâncias seguintes:

a) A fracção do imposto espanhol correspondente à parte do rendimento tributado em Portugal;

b) A fracção do imposto português sobre o rendimento, calculado antes da dedução, correspondentes aos rendimentos tributados em Espanha.

CAPÍTULO V

Disposições específicas

ARTIGO 25^a.

(Não discriminação)

1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação com ela conexa diferentes ou mais gravosas do que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem na mesma situação.

2. O termo "nacionais" designa:

- a) Todas as pessoas singulares que tenham a nacionalidade de um Estado Contratante;
- b) Todas as pessoas colectivas e associações constituídas de harmonia com a legislação em vigor num Estado Contratante.

3. A tributação de um estabelecimento estável que uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante não será nesse outro Estado menos favorável do que a das empresas desse outro Estado que exerçam as mesmas actividades.

Esta disposição não pode ser interpretada no sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante as deduções pessoais, abatimentos e reduções para efeitos fiscais atribuídos em função do estado civil ou encargos familiares e concedidos aos seus próprios residentes.

4. As empresas de um Estado Contratante cujo capital, total ou parcialmente, directa ou indirectamente, seja possuído ou controlado, por um ou mais residentes do outro Estado Contratante, não ficarão sujeitas, no Estado Contratante primeiramente mencionado, a nenhuma tributação ou obrigação com ela conexa diferentes ou mais gravosas do que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitas as empresas similares desse primeiro Estado.

5. O termo "tributação" designa no presente artigo os impostos de qualquer natureza ou denominação.

ARTIGO 26^a.

(Procedimento amigável)

1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as medidas tomadas por um Estado Contratante ou por ambos os Estados Contratantes conduzem ou poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação não conforme com esta Convenção, poderá, independentemente dos recursos estabelecidos pela legislação nacional desses Estados, submeter o seu caso à apreciação da autoridade competente do Estado Contratante de que é residente.

O pedido deverá ser apresentado dentro de dois anos a contar da data da comunicação da última tributação ou, no caso de imposto devido na fonte, da data da respectiva entrega ao Estado.

2. Essa autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar fundada e não estiver em condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver a questão através de acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado Contratante, a fim de evitar a tributação não conforme com a Convenção.

3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, através de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas a que possa dar lugar a interpretação ou a aplicação da Convenção.

4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar directamente entre si a fim de chegarem a acordo nos termos indicados nos números anteriores. Se se afigurar que tal acordo poderá ser facilitado por troca de impressões orais, essas trocas de impressões podem efectuar-se no seio de

uma comissão composta por representantes das autoridades competentes dos Estados Contratantes.

ARTIGO 27^a.

(Troca de informações)

1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessárias para aplicar esta Convenção e as leis internas dos Estados Contratantes relativas aos impostos abrangidos por esta Convenção na medida em que a tributação nelas prevista for conforme com esta Convenção. Todas as informações deste modo trocadas serão consideradas secretas e só poderão ser comunicadas às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou cobrança dos impostos abrangidos por esta Convenção.

2. O disposto no n.º 1 nunca poderá ser interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contratantes a obrigação:

- a) De tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação ou à sua prática administrativa ou às do outro Estado Contratante;
- b) De fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua legislação ou no âmbito da sua prática administrativa normal ou das do outro Estado Contratante;
- c) De transmitir informações reveladoras de segredos comerciais, industriais, de negócios ou profissionais ou de processos comerciais ou industriais, ou informações cuja comunicação seria contrária à ordem pública.

ARTIGO 28^o.

(Funcionários diplomáticos e consulares,

O disposto na presente Convenção não prejudicará os privilégios fiscais de que beneficiam os funcionários diplomáticos ou consulares em virtude das regras gerais do direito internacional ou das disposições de acordos especiais.

ARTIGO 29^o.

(Extensão territorial)

1. Esta Convenção poderá tornar-se extensiva, nos termos presentes ou com as necessárias modificações, a parte ou a todo o território de Portugal que foi excluído da sua aplicação e que exija impostos de carácter análogo àqueles a que se aplica a Convenção. Tal extensão tornar-se-á efectiva, na data, com as modificações e nas condições, incluindo as relativas à cessação de aplicação, fixadas de comum acordo entre os Estados Contratantes por troca de notas diplomáticas ou segundo outro procedimento conforme com as respectivas disposições constitucionais.

2. A não ser que outra coisa seja convencionada entre os dois Estados Contratantes, quando a Convenção for denunciada por um deles segundo o artigo 31^o, deixará de se aplicar, nas condições previstas nesse artigo, a todo o território^a que, de acordo com este artigo, se tenha tornado extensiva.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 30^o.

(Entrada em vigor)

1. A presente Convenção será ratificada e os instrumentos de ratificação serão trocados em Lisboa o mais cedo possível.

2. A Convenção entrará em vigor um mês após a troca dos instrumentos de ratificação e as suas disposições serão aplicáveis:

a) Em Espanha:

Aos impostos cuja obrigação surja em 1 de Janeiro do ano seguinte ao da entrada em vigor da Convenção ou posteriormente.

b) Em Portugal:

1^o. Aos impostos devidos na fonte, cuja obrigação surja em 1 de Janeiro do ano seguinte ao da entrada em vigor da Convenção ou posteriormente.

2^o. Aos demais impostos relativos a rendimentos obtidos em 1 de Janeiro do ano seguinte ao da entrada em vigor da Convenção ou posteriormente.

3. Não obstante o disposto no n.º 2, as disposições do artigo 8^o. aplicar-se-ão, relativamente às companhias de navegação aérea, aos impostos sobre os rendimentos obtidos a partir de 1 de Janeiro de 1963.

ARTIGO 31.^o

(Denúncia)

A presente Convenção estará em vigor enquanto não for denunciada por um dos Estados Contratantes. Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a Convenção por via diplomática com um aviso prévio mínimo de seis meses antes do fim de qualquer ano civil. Nesse caso, a Convenção deixará de se aplicar:

a) Em Espanha:

Aos impostos cuja obrigação surja em 1 de Janeiro do ano seguinte àquele em que foi comunicada a denúncia ou posteriormente.

b) Em Portugal:

1.^o Aos impostos devidos na fonte, cuja obrigação surja em 1 de Janeiro do ano seguinte àquele em que foi comunicada a denúncia ou posteriormente.

2.^o Aos demais impostos relativos aos rendimentos obtidos em 1 de Janeiro do ano seguinte àquele em que foi comunicada a denúncia ou posteriormente.

EM TESTEMUNHO DO QUAL OS ABAIXO ASSINADOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, ASSINARAM A PRESENTE CONVENÇÃO.

FEITO em duplicado, em Madrid, em 30 de Maio de 1968,¹ em português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos.

Pelo Governo
Português:

[Signed — Signé]

LUIS DA CÂMARA PINTO-COELHO

Pelo Governo
espanhol:

[Signed — Signé]

FERNANDO MARÍA CASTIELLA

¹ Should read "29 de Maio de 1968 — Devrait se lire « 29 de Maio de 1968 ».

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION¹ BETWEEN SPAIN AND PORTUGAL FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Head of the Spanish State and the President of the Portuguese Republic, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, have for that purpose appointed as their plenipotentiaries:

The Head of the Spanish State: His Excellency Mr. Fernando María Castiella y Maiz, Minister for Foreign Affairs;

The President of the Portuguese Republic: His Excellency Mr. Luís da Câmara Pinto Coelho, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portugal in Spain;

who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2. TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

(a) In Spain:

1. The general tax on the income of individuals (*impuesto general sobre la renta de las personas físicas*);
2. The general tax on the income of companies (*impuesto general sobre la renta de sociedades*) and other legal entities, including the special tax of 4 per cent instituted by article 104 of Act No. 41/1964 of 11 June 1964;
3. The following taxes collected in advance: the land tax on rural and agricultural property (*contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria*), the land tax on urban property (*contribución territorial sobre la riqueza urbana*), the tax

¹ Came into force on 26 March 1970, i.e., one month after the exchange of the instruments of ratification, which took place at Lisbon on 26 February 1970, in accordance with article 30 (1) and (2).

on earnings from personal services (*impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal*), the tax on income from capital (*impuesto sobre las rentas del capital*) and the tax on commercial and industrial activities and profits (*impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales*);

4. In Equatorial Guinea, Sahara and Ifni, the taxes on income (on earned income and income from fortune) and on the profits of enterprises;
 5. In the case of enterprises governed by the Act of 26 December 1958 which are engaged in prospecting for and extracting hydrocarbons, over and above the other taxes enumerated in this article, the tax on surface area, the tax on gross earnings and the special tax on the profits of such enterprises;
 6. Local taxes on income;
- (hereinafter referred to as “Spanish tax”).

(b) In Portugal:

1. The land tax (*contribuição predial*);
2. The tax on agriculture (*imposto sobre a indústria agrícola*);
3. The industrial tax (*contribuição industrial*);
4. The tax on income from capital (*imposto de capitais*);
5. The professional tax (*imposto profissional*);
6. The tax for overseas defence and development (*imposto para a defesa e valorização do Ultramar*);
7. The tax on capital gains (*imposto de mais-valias*);
8. The supplementary tax (*imposto complementar*);
9. Surcharges on the taxes referred to in subparagraphs 1 to 8 above;
10. Taxes imposed on behalf of local authorities, the amount of which is determined on the basis of the taxes referred to in subparagraphs 1 to 8 above, and the corresponding surcharges;

(hereinafter referred to as “Portuguese tax”).

4. This Convention shall also apply to any identical or similar taxes which may be imposed in future in addition to or in place of, the existing taxes. At the beginning of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any changes made in their respective tax laws during the preceding year.

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context requires otherwise:

(a) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Spain or Portugal, as the context requires;

(b) The term “Spain” means the mainland and island territories, Ceuta, Melilla, Equatorial Guinea, Sahara and Ifni;

(c) The term “Portugal” means “European Portugal” and comprises, without prejudice to article 29 of this Convention, the mainland territory and the Azores and Madeira archipelagos;

(d) The term “person” means an individual or a company;

(e) The term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) The term “competent authority” means:

1. In Spain: the Minister of Finance, the Director-General of Direct Taxation or any other authority delegated by the Minister;
2. In Portugal: the Minister of Finance, the Director-General of Taxation or any other authority delegated by the Minister.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4. FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, his status shall be determined in accordance with the following rules:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a habitual abode;

(c) If he has a habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5. PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:

- (a) A place of management;
- (b) A branch;
- (c) An office;
- (d) A factory;
- (e) A workshop;
- (f) A mine, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) A building site or construction or assembly project which exists for more than 12 months.

3. The term “permanent establishment” shall not include:

(a) The use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

(e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information, carrying out scientific research or engaging in similar activities of a preparatory or auxiliary nature, provided that these activities are carried out for the enterprise.

4. Where a person other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, it shall be deemed to constitute a permanent establishment in the first-mentioned State if it has and habitually exercises in that State the authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless its activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or that it carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself make either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term “immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting land property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property. This provision shall also apply to income derived from property which, in accordance with the tax laws of the Contracting State in which the property is situated, is subject to the same treatment as income derived from immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to income derived from the immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7. BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and if it were dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions duly substantiated expenses which have been incurred for the purposes of the permanent establishment, including equally substantiated executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Convention, the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

*Article 8. SHIPPING, TRANSPORT BY INLAND WATERWAY
AND AIR TRANSPORT*

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. Profits from the operation of boats engaged in transport by inland waterway shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. If the place of effective management of a shipping enterprise or an inland waterway transport enterprise is aboard a ship or boat, it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship or boat is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship or boat is a resident.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to the profits which an enterprise of a Contracting State derives from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9. ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

(a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10. DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which holds directly at least 50 per cent of the capital of the company paying the dividends, provided that the said capital consists of shares of stock or corporate shares held for a minimum period of one year prior to the date of the distribution of dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subject to the same treatment as income from shares under the tax laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

For the purposes of this Convention, the taxation of reserves incorporated into the capital of companies shall be governed by the provisions of this article.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, has, in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected. In such cases, the provisions of article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State nor subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The income from the public debt of either Contracting State may be taxed only in that State.

4. The term “interest” as used in this article means income from the public debt, from bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and from debt-claims of any kind, as well as any other income subject under the tax laws of the State in which it arises to the same treatment as income from money lent.

Payments made to an enterprise as compensation for its going out of business or reducing its business activities are subject under Portuguese tax laws to the same treatment as income from loans.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, has, in the other Contracting State in which the interest arises, a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such cases, the provisions of article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, one of its local authorities or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether or not he is a resident of a Contracting State, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred and the payment of such interest is borne by that permanent establishment, such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12. ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematographic films, and any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information on industrial, commercial or scientific expertise.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected. In such cases, the provisions of article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, one of its local authorities or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether or not he is a resident of a Contracting State, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred and the payment of such royalties is borne by that permanent establishment, such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the

beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13. CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including gains from the alienation of such permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or such fixed base, may be taxed in the other State.

Gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and boats engaged in transport by inland waterway, as well as movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 and 2 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. The provisions of this article shall not preclude Portugal from imposing the capital gains tax in force on the date of signature of this Convention on any gains from the issue of shares where preference is given to the shareholders of companies having their headquarters or place of effective management in Portugal.

Article 14. INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State, unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State, but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of articles 16, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State, unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and with the reservations mentioned therein, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable in the first-mentioned State only if:

(a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the tax year concerned;

(b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic or a boat engaged in transport by inland waterway may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Where the remuneration referred to in paragraph 1 of this article is derived by persons who reside in municipal areas of a Contracting State bordering on the other Contracting State and who work in that other State in municipal areas bordering on the first-mentioned State, travelling daily from their place of residence to their place of work (frontier workers), that remuneration shall be taxable only in the State of residence.

Article 16. DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State, provided that such remuneration is determined and paid by the company for his participation in the activities of the board of directors. In all other cases, the provisions of article 15 shall apply.

Article 17. ARTISTS AND ATHLETES

Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

Article 18. PENSIONS

Subject to the provisions of article 19, paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19. GOVERNMENT SERVICE

1. Remuneration, including pensions, paid directly or from a special fund by a Contracting State or one of its local authorities to an individual in respect of services rendered to that State or local authority in the performance of government service may be taxed in that State.

2. The provisions of articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions paid in respect of services rendered in connection with commercial or industrial activities carried on by one of the Contracting States or a local authority thereof.

Article 20. BROKERS

1. Income derived by a broker who is a resident of a Contracting State in respect of services rendered in the course of his activities as such may be taxed only in that State, unless he conducts transactions in the other Contracting State through a permanent establishment or fixed base situated therein. If he has such a permanent establishment or fixed base, the income may be taxed in that other Contracting State, but only so much of it as is attributable to the permanent establishment or the fixed base, as the case may be.

2. The term "broker" means any person who, being of an independent status and receiving remuneration, seeks to facilitate transactions between other parties.

Article 21. TEACHERS

Professors or teachers who are or were immediately before visiting a Contracting State residents of the other Contracting State and who derive remuneration from teaching at a university, college, school or other educational establishment in the first-mentioned State, during a period of temporary residence not exceeding two years, shall be exempt from taxation in that State in respect of such remuneration, provided that the aforesaid establishments belong to the State or to a non-profit legal entity and the remuneration is not taxable in the other State.

Article 22. STUDENTS

1. Payments received for the purpose of his maintenance, education or training by a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, shall not be taxed in the first-mentioned State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Students at a university or other institution of higher or technical education in one Contracting State who exercise an employment in the other Contracting State for the purpose of obtaining practical training related to their course of study shall not be taxed in that other State in respect of any remuneration derived from such employment, provided that its duration does not exceed 183 days during the tax year in question.

Article 23. INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

1. Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing articles shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, items of income paid to a sleeping partner in a partnership account shall be taxed in accordance with the provisions of article 10.

CHAPTER IV

Article 24. METHODS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

Double taxation shall be avoided as follows:

In Spain:

(a) Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Portugal, Spain shall deduct from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Portugal. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Spanish tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income taxed in Portugal. The tax paid in Portugal shall also be deducted from Spanish taxes paid in advance, in accordance with the provisions of this paragraph;

(b) Profits derived by a permanent establishment situated in Portugal and belonging to a resident of Spain shall be exempt from taxation in Spain, but Spain may, in calculating the tax on the remaining income of such resident, apply the tax rate which would be applicable without that exemption.

The provisions of this paragraph shall not apply to permanent establishments whose profits consist wholly or primarily of the income referred to in articles 10 and 11; in such cases, the provisions of subparagraph (a) of this article shall apply.

In Portugal: Where a resident of Portugal derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Spain, Portugal shall deduct from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Portugal in respect of such income.

Such deduction shall not, however, exceed the lesser of the following two amounts:

(a) That part of the Spanish tax which is attributable to the income taxed in Portugal;

(b) That part of the Portuguese income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income taxed in Spain.

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 25. NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The term "nationals" means:

(a) All individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(b) All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

3. The taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourable in that

other State than the taxation of enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes granted by reason of civil status or family responsibilities to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this article, the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 26. MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, independently of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

The application must be submitted within two years from the communication or notification of the most recent taxation or, in the case of taxes withheld at source, from the date of collection of the tax.

2. The competent authority shall, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27. EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the implementation of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to the persons or authorities responsible for the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed as imposing on a Contracting State the obligation:

(a) To carry out administrative measures at variance with its own laws or administrative practice or with those of the other Contracting State;

(b) To supply information which is not obtainable under its own laws or normal administrative practice or those of the other Contracting State;

(c) To supply information which would disclose any trade, industrial, business or professional secret or trade or industrial process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

Article 28. DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the tax privileges enjoyed by diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29. TERRITORIAL EXTENSION

1. This Convention may be extended, in its present form or with the necessary modifications, to any part of the territory of Portugal which has been excluded from its scope and which imposes taxes substantially similar to those to which the Convention applies. Any such extension shall take effect from such date and with such modifications and conditions, including conditions as to termination, as may be agreed between the Contracting States through an exchange of diplomatic notes or any other procedure in keeping with their respective constitutional provisions.

2. Unless the Contracting States agree otherwise, the denunciation of this Convention by one of them, in accordance with article 31, shall terminate, in the manner provided for in that article, the application of the Convention to any part of the territory to which it has been extended under this article.

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 30. ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Lisbon as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force one month after the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall apply:

In Spain: In respect of taxes payable on or after 1 January of the year following the year in which the Convention entered into force;

In Portugal:

(a) In respect of taxes withheld at source, to taxes which become payable on or after 1 January of the year following the year in which the Convention entered into force;

(b) In respect of other taxes, to taxes on income derived on or after 1 January of the year following the year in which the Convention entered into force.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, the provisions of article 8 shall apply in respect of taxes on the income derived by airlines as from 1 January 1963.

Article 31. DENUNCIATION

This Convention shall remain in force until it is denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention through the diplomatic channel, giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to apply:

In Spain: In respect of taxes payable on or after 1 January of the year following the year in which notice of termination was given;

In Portugal:

(a) In respect of taxes withheld at source, to taxes which become payable on 1 January of the year following the year in which notice of termination was given;

(b) In respect of other taxes, to taxes on income derived on or after 1 January of the year following the year in which notice of termination was given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized thereto, have signed and sealed this Convention.

DONE at Madrid on 29 May 1968, in duplicate in the Spanish and Portuguese languages, both texts being equally authentic.

For the Spanish
Government:

[Signed]

FERNANDO MARIA CASTIELLA

For the Portuguese
Government:

[Signed]

LUIS DA CAMARA PINTO-COELHO

[TRADUCTION — TRANSLATION]

CONVENTION¹ ENTRE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL VISANT À
ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔT
SUR LE REVENU

Le Chef de l'Etat espagnol et le Président de la République portugaise, désireux de conclure une Convention visant à éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu, ont désigné pour ce faire comme plénipotentiaires :

Le Chef de l'Etat espagnol, Monsieur Fernando María Castiella y Maiz, ministre des affaires étrangères;

Le Président de la République portugaise, Son Excellence Monsieur Luís da Câmara Pinto Coelho, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

lesquels, ayant échangé leurs pouvoirs et les ayant reconnus valides, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. DOMAINE D'APPLICATION
DE LA CONVENTION*Article premier.* PERSONNES VISÉES

La présente Convention s'applique à toute personne qui est un résident de l'un ou des deux Etats Contractants.

Article 2. IMPÔTS VISÉS

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu exigibles par chacun des Etats Contractants et par leurs collectivités locales, quel qu'en soit le régime de perception.

2. Est considéré comme impôt sur le revenu tout prélèvement fiscal assis sur tout ou partie du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles et les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne l'Espagne :

- 1) L'impôt général sur le revenu des personnes physiques (*impuesto general sobre la renta de sociedades*);
- 2) L'impôt général sur le revenu des sociétés et autres personnes morales (*impuesto general sobre la renta de sociedades*), y compris le prélèvement extraordinaire de 4 p. 100 institué par l'article 104 de la Loi 41/1964 du 11 juin;
- 3) Les impôts forfaitaires suivants : contribution foncière rurale et pastorale (*contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria*); contribution foncière urbaine (*contribución territorial sobre la riqueza urbana*); impôt sur le produit

¹ Entrée en vigueur le 26 mars 1970, soit un mois après l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Lisbonne le 26 février 1970, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

du travail indépendant (*impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal*); impôt sur le revenu du capital (*impuesto sobre las rentas del capital*); impôt sur les activités et bénéfices industriels et commerciaux (*impuesto sobre actividades y beneficios comerciales y industriales*);

- 4) En Guinée équatoriale, au Sahara espagnol et à Ifni, les impôts sur le revenu (produit du travail et revenu du capital) et sur les bénéfices des entreprises;
- 5) S'agissant des entreprises relevant de la Loi du 26 décembre 1958 qui se livrent à la recherche et à la prospection d'hydrocarbures, outre les autres impôts énumérés au présent paragraphe — les redevances à l'hectare, l'impôt sur la production brute et l'impôt extraordinaire sur les bénéfices desdites sociétés;
- 6) Les impôts locaux sur le revenu;

(ci-après dénommés « impôt espagnol ».)

b) En ce qui concerne le Portugal :

- 1) La contribution foncière (*contribuição predial*);
- 2) L'impôt sur l'industrie agricole (*imposto sobre a indústria agrícola*);
- 3) La contribution industrielle (*contribuição industrial*);
- 4) L'impôt sur les revenus du capital (*imposto de capitais*);
- 5) L'impôt professionnel (*imposto profissional*);
- 6) L'impôt pour la défense et la mise en valeur de l'outre-mer (*imposto para a defesa e valorização do Ultramar*);
- 7) L'impôt sur les plus-values (*imposto de mais-valias*);
- 8) L'impôt complémentaire (*imposto complementar*);
- 9) Les surtaxes relatives aux impôts 1 à 8 ci-dessus;
- 10) Les impôts prélevés par les collectivités locales, calculés en fonction des impôts 1 à 8 ci-dessus et des surtaxes correspondantes;

(ci-après dénommés « impôt portugais ».)

4. La présente Convention s'applique en outre aux impôts analogues ou de même nature, établis postérieurement à la signature de la présente Convention, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les Autorités compétentes des Etats Contractants se communiquent, au début de chaque année, les modifications qui ont été apportées à leur législation fiscale respective pendant l'année précédente.

CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Article 3. DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'appelle une interprétation différente, on entend par :

a) « L'un des Etats Contractants » et « l'autre Etat Contractant » — l'Espagne ou le Portugal, suivant le contexte;

b) « L'Espagne » — le territoire espagnol de la péninsule ibérique et des îles, Ceuta et Melilla, la Guinée équatoriale, le Sahara espagnol et Ifni;

c) « Le Portugal » — le territoire portugais d'Europe et, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la présente Convention, les archipels des Açores et de Madère;

d) « Personne » — toute personne physique ou société;

e) « Société » — toute personne morale ou toute entité assimilée à une personne morale au regard de l'impôt;

f) « Entreprise de l'un des Etats contractants » et « entreprise de l'autre Etat contractant » — respectivement, une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats contractants et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g) « Autorité compétente »

1) En Espagne : Le Ministre des finances, le Directeur général des impôts directs, ou toute autre Autorité à laquelle le Ministre délègue ses pouvoirs;

2) Au Portugal : Le Ministre des finances, le Directeur général des contributions et impôts, ou toute autre Autorité à laquelle le Ministre délègue ses pouvoirs;

2. Aux fins de l'application de la présente convention par l'un des Etats contractants, tout mot ou expression qui n'est pas expressément défini a le sens que lui attribuent les dispositions législatives dudit Etat contractant au regard des impôts visés par la présente Convention, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente.

Article 4. DOMICILE FISCAL

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « résident de l'un des Etats contractants » toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, du siège de sa direction ou de tout autre critère du même ordre.

2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée comme suit :

a) La personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'une habitation permanente. Si elle dispose d'une habitation permanente dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel elle a les liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) Si l'on ne peut déterminer dans quel Etat contractant se trouve le centre de ses intérêts vitaux, ou si elle ne dispose d'habitation permanente dans aucun des deux Etats contractants, la personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne habituellement;

c) Si elle séjourne habituellement dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne habituellement ni dans l'un ni dans l'autre, la personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle a la nationalité;

d) Si elle a la nationalité des deux Etats contractants ou si elle n'a la nationalité ni de l'un ni de l'autre, les Autorités compétentes des Etats contractants règlent le cas d'un commun accord.

3. Si en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est consi-

dérée comme un résident de l'Etat contractant où est situé le siège de sa direction effective.

Article 5. ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, on entend par « établissement stable » un local professionnel fixe où s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise.

2. L'expression « établissement fixe » désigne notamment :

- a) Un siège de direction;
- b) Une succursale;
- c) Un bureau;
- d) Une usine;
- e) Un atelier;
- f) Une mine, une carrière où tout autre chantier d'extraction de ressources naturelles;
- g) Des travaux ou un chantier de construction ou de montage d'une durée supérieure à 12 mois.

3. L'expression « établissement fixe » ne désigne pas :

- a) Des installations employées aux seules fins d'entreposer, d'exposer ou de livrer des marchandises appartenant à l'entreprise;
- b) Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, tenu exclusivement en vue de l'entreposage, l'exposition ou la livraison des marchandises;
- c) Un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, tenu exclusivement en vue de la transformation des marchandises par une autre entreprise;
- d) Un local professionnel fixe employé exclusivement pour acheter des marchandises ou pour réunir des renseignements pour le compte de l'entreprise;
- e) Un local professionnel fixe employé exclusivement pour faire de la publicité, communiquer des renseignements, réaliser des recherches scientifiques ou des activités similaires de nature préparatoire ou auxiliaire, menées par l'entreprise pour son propre compte.

4. Lorsqu'une personne autre qu'un agent indépendant visé au paragraphe 5 agit dans un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette personne est considérée comme un établissement stable de l'entreprise du premier Etat si elle possède et exerce habituellement dans cet Etat le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que ses activités ne se limitent à l'achat de biens et de marchandises pour ladite entreprise.

5. Une entreprise de l'un des Etats contractants n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du simple fait qu'elle y exerce des activités par l'intermédiaire d'un courtier, d'un agent général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, dans la mesure où celui-ci agit dans le cadre ordinaire de son activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contractants contrôle une société ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité, par l'intermédiaire d'un établissement

stable ou autrement, ne suffit pas, en soi, à faire de l'une ou l'autre de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III. FISCALITÉ DU REVENU

Article 6. REVENUS IMMOBILIERS

1. Les revenus de biens immeubles sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel lesdits biens sont situés.

2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où lesdits biens sont situés. L'expression désigne en tous cas les accessoires, le bétail et l'outillage des exploitations agricoles et sylvicoles; les droits assujettis aux dispositions de droit privé concernant la propriété foncière; l'usufruit de biens immeubles; et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession d'exploitation de gisements miniers, sources et autres ressources naturelles. Les navires, embarcations et aéronefs ne sont pas réputés biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'utilisation directe, de la location, de l'affermage ou de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles. Les présentes dispositions s'appliquent de même aux revenus tirés de biens qui, aux termes de la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens sont situés, sont assimilés à des revenus immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immeubles servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7. BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants sont imposables exclusivement dans ledit Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans ce dernier cas, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont attribuables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé audit établissement stable, dans chaque Etat contractant, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues, et traitant sans lien de dépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, il est admissible de déduire les dépenses, dûment justifiées, qui ont été exposées aux fins dudit établissement, y compris les frais de gestion et les frais généraux d'administration, dûment justifiés, engagés aux mêmes fins, que ce soit dans l'Etat contractant où est situé ledit établissement ou ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputable à un établissement stable du seul fait qu'il a acquis des marchandises pour l'entreprise.

5. Sont réservées les dispositions des autres articles de la présente Convention qui traitent séparément de certains éléments de revenu entrant dans la composition des bénéfices.

Article 8. NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dans le trafic international sont imposables exclusivement dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'embarcations se livrant à la navigation dans les eaux intérieures sont imposables exclusivement dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou de navigation intérieure est situé à bord d'un navire ou d'une embarcation, ledit siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache du navire ou de l'embarcation ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont est résident l'exploitant du navire ou de l'embarcation.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 9. ENTREPRISES ASSOCIÉES

Lorsque

a) Une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues avec des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10. DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 50 p. 100 du capital social de la société qui paie les dividendes, si elle détient les actions ou parts de capital constituant cette participation depuis au moins un an avant la distribution des dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les Autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limites.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent à payer les dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions de capital, d'actions ou bons de jouissance, de parts de mines, de parts de fondateur ou d'autres droits de participations aux bénéfices (à l'exclusion des créances), ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Aux fins de la présente Convention, la fiscalité applicable à l'incorporation de réserves au capital social des sociétés est assujettie aux dispositions du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, bien qu'il soit un résident de l'un des Etats contractants, possède, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats contractants reçoit des bénéfices ou des revenus provenant de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des personnes qui ne sont pas résidents de cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de la fiscalité des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11. INTÉRÊTS

1. Les intérêts provenant de l'un des Etats contractants et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut dépasser 15 p. 100 du montant des intérêts.

Les Autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite.

3. Les revenus d'emprunts publics émis par l'un des Etats contractants sont imposables exclusivement dans cet Etat.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne : les revenus d'emprunts publics, de bons ou obligations assortis ou non de garanties hypothécaires ou participations aux bénéfices; les revenus de créances de toute nature; et tous autres revenus que la législation fiscale de l'Etat d'où ils proviennent assimile au rendement d'un prêt.

La législation fiscale portugaise assimile au rendement d'un prêt les sommes payées à une entreprise pour l'indemniser de la suspension ou de la réduction de ses activités.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des Etats contractants, possède, dans l'autre Etat contractant dont proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui motive lesdits intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités locales ou un de ses résidents. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats contractants, possède, dans l'un des Etats contractants, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui motive les intérêts, et que l'établissement stable assure le paiement des intérêts, on considère que lesdits intérêts proviennent de l'Etat contractant où est situé ledit établissement stable.

7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance au titre de laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire des intérêts en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12. REDEVANCES

1. Les redevances provenant de l'un des Etats contractants et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi exigible ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances. Les Autorités compétentes des Etats contractants établissent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite.

3. Dans le présent article, le terme « redevances » désigne les rémunérations de toutes sortes payées pour l'usage ou pour la concession de droits d'auteur relatifs à une œuvre littéraire, artistique, scientifique ou cinématographique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'emploi ou la concession de matériels industriels, commerciaux ou scientifiques, ou pour des renseignements relatifs à une expérience acquise dans les secteurs industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l'un des Etats contractants, possède, dans l'autre Etat contractant dont proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui motive lesdites redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités locales ou un de ses résidents. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats contractants, possède, dans l'un des Etats contractants,

un établissement stable auquel se rattache effectivement la prestation qui motive les redevances, et que l'établissement stable assure le paiement des redevances, on considère que lesdites redevances proviennent de l'Etat contractant où est situé ledit établissement stable.

6. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation au titre de laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire des redevances en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13. PLUS-VALUES

1. Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immeubles, définis au sens de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où lesdits biens sont situés.

2. Les plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles appartenant à l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat contractant, ou de biens immeubles appartenant à une base fixe qu'un résident de l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris les plus-values réalisées lors de la cession dudit établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de ladite base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Les plus-values réalisées lors de la cession de navires et aéronefs employés pour le trafic international et d'embarcations servant à la navigation dans les eaux intérieures, de même que des biens meubles servant à l'exploitation desdits navires, embarcations ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où est établie la direction effective de l'entreprise.

3. Les plus-values réalisées lors de la cession de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

4. Les dispositions du présent article n'empêchent pas le Portugal d'exiger le paiement de l'impôt sur les plus-values, en vigueur à la date où la présente Convention est signée, au titre de l'émission d'actions assorties de droits préférentiels de souscription pour les membres de sociétés ayant leur siège social ou leur direction effective au Portugal.

Article 14. PROFESSIONS INDÉPENDANTES

1. Les revenus qu'un résident de l'un des Etats contractants tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités assimilées ayant un caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant.

2. L'expression « profession libérale » désigne en particulier toute activité indépendante d'ordre scientifique, littéraire, artistique, pédagogique ou didactique,

ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15. PROFESSIONS DÉPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et rémunérations assimilées que le résident de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans cet autre Etat, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 mais avec les réserves qui y sont faites, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les trois conditions suivantes sont réunies :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours pendant l'exercice fiscal considéré;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat;

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou par une base fixe que l'employeur possède dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule de transport routier en trafic international, ou à bord d'une embarcation navigant dans les eaux intérieures, sont imposables dans l'Etat contractant où est situé le siège effectif de la direction de l'entreprise.

4. Lorsque les rémunérations visées au paragraphe 1 du présent article sont reçues par des personnes qui, dans l'un des Etats contractants, résident dans une commune limitrophe de l'autre Etat contractant et qui exercent leur emploi dans une commune limitrophe du premier Etat en se déplaçant quotidiennement du lieu de leur domicile à celui de leur travail (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans l'Etat dont les salariés sont des résidents.

Article 16. RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les tantièmes, jetons de présence et rémunérations assimilées qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de contrôle d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, dans la mesure où ces rémunérations sont calculées et payées par la société à raison de la participation effective du bénéficiaire aux travaux du conseil d'administration ou de contrôle. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 15 sont applicables.

Article 17. ARTISTES ET SPORTIFS

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un artiste du spectacle (acteur de théâtre, artiste de cinéma, de la radio ou de la télévision, musicien) ou un sportif tire de ses activités personnelles exercées à ce titre sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

Article 18. PENSIONS

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et rémunérations assimilées payées à un résident de l'un des Etats contractants au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19. FONCTIONS PUBLIQUES

1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par l'un des Etats contractants ou l'une de ses administrations ou collectivités locales à une personne physique, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués à cette fin, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette administration ou collectivité locale dans l'exercice de fonctions publiques, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses administrations ou collectivités locales.

Article 20. AGENTS D'AFFAIRES

1. Les revenus reçus à titre de rémunération de ses services habituels par un agent d'affaires qui est un résident de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ledit agent ne fasse affaire dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe situés dans cet autre Etat. Dans ce cas, la fraction des revenus imputable à l'établissement permanent ou à la base fixe, selon le cas, est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression « agent d'affaires » désigne toute personne qui fait métier, à titre indépendant, de faciliter des transactions entre des tiers.

Article 21. ENSEIGNANTS

Un enseignant qui est — ou qui était immédiatement auparavant — un résident de l'un des Etats contractants et qui reçoit une rémunération au titre d'activités d'enseignement exercées dans une université, un collège, une école ou un autre établissement d'enseignement de l'autre Etat contractant pendant un séjour temporaire n'excédant pas deux années, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat à l'égard de ladite rémunération, sous réserve que l'établissement concerné appartienne à l'Etat ou à une personne morale sans but lucratif et que la rémunération en question ne soit pas imposable dans le premier des Etats mentionnés.

Article 22. ETUDIANTS

1. Un étudiant ou un stagiaire qui est — ou qui était immédiatement auparavant — un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation est exonéré d'impôt dans cet autre Etat sur les sommes qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étude ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors dudit Etat.

2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique de l'un des Etats contractants, qui travaille dans l'autre Etat

contractant afin d'obtenir une formation pratique ayant trait à ses études, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat à l'égard de la rémunération provenant de ce travail, sous réserve qu'il ne travaille pas plus de 183 jours pendant l'exercice fiscal.

Article 23. REVENUS NON EXPRESSÉMENT MENTIONNÉS

1. Les éléments de revenu d'un résident de l'un des Etats contractants, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas expressément mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les revenus versés aux simples participants de sociétés de placement sont imposables selon les dispositions de l'article 10.

CHAPITRE IV

Article 24. MÉTHODE VISANT À ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

On évite la double imposition de la manière suivante :

En Espagne :

a) Lorsqu'un résident de l'Espagne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Portugal, l'Espagne déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l'impôt payé au Portugal. Toutefois, cette déduction ne peut être supérieure au montant de l'impôt espagnol qui serait autrement exigible au titre des revenus imposables au Portugal. L'impôt payé au Portugal est également déductible des impôts forfaitaires espagnols, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

b) Les revenus reçus par un établissement stable situé au Portugal et appartenant à un résident de l'Espagne sont exempts d'impôt en Espagne, mais l'Espagne peut en tenir compte dans le calcul du taux de l'impôt applicable aux autres revenus de ce résident.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux établissements stables dont les bénéficiaires sont exclusivement ou principalement constitués par des revenus visés aux articles 10 et 11; ces cas relèvent des dispositions de l'alinéa a du présent article.

Au Portugal : Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne, le Portugal déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l'impôt payé en Espagne au titre de ces revenus.

Toutefois, cette déduction ne peut être supérieure au plus petit des montants suivants :

a) La fraction de l'impôt espagnol correspondant à la partie des revenus imposables au Portugal;

b) La fraction de l'impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, qui correspond aux revenus imposables en Espagne.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 25. NON-DISCRIMINATION

1. Les ressortissants de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus onéreuse que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. On entend par « ressortissant » :

a) Toute personne physique qui possède la nationalité de l'un des Etats contractants;

b) Toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats contractants.

3. L'établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat contractant ne peut être assujetti dans cet autre Etat à une fiscalité moins favorable que celle qui s'applique aux entreprises de ce dernier Etat dans la même branche d'activités.

Les présentes dispositions n'obligent aucun des Etats contractants à accorder à des résidents de l'autre Etat contractant les abattements individuels, dégrèvements ou réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents à raison de leur état civil ou de leurs charges de famille.

4. Une entreprise de l'un des Etats contractants, dont le capital appartient ou est contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne peut être assujettie, dans le premier Etat susmentionné, à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus onéreuse que celle à laquelle est ou pourrait être assujettie une entreprise de ce premier Etat qui se trouve dans la même situation.

5. Le présent article s'applique à tous les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26. PROCÉDURE AMIABLE

1. Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou pourraient entraîner pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'Autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident.

Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à partir de la date de notification de la dernière imposition ou, dans le cas d'impôts retenus à la source, de la date du versement au Trésor public des montants ainsi retenus.

2. L'Autorité compétente saisie s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'Autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition qui ne serait pas conforme à la présente Convention.

3. Les Autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention.

4. Les Autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir aux accords prévus aux paragraphes précédents. S'il est jugé souhaitable, afin de parvenir à un accord, de procéder à des consultations orales, celles-ci peuvent avoir lieu dans le sein d'une commission composée de représentants des Autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27. ECHANGE D'INFORMATIONS

1. Les Autorités compétentes des Etats contractants échangent les informations nécessaires à l'application de la présente Convention et de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, qui sont exigés aux termes de celle-ci. Les informations ainsi échangées ont un caractère confidentiel et ne peuvent être communiquées à aucune personne ou autorité, sauf celles qui sont chargées de cotiser ou de recouvrer les impôts visés par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de :

a) Prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b) Fournir des informations qui ne pourraient être obtenues aux termes de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) Fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, économique ou professionnel, ou un procédé commercial ou industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 28. AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29. EXTENSION TERRITORIALE

1. La présente Convention peut être étendue, dans sa forme actuelle ou avec les modifications voulues, à tout ou partie du territoire du Portugal qui a été exclu du domaine d'application de la présente Convention et où s'appliquent des impôts analogues à ceux qui sont visés par celle-ci. Cette extension prend effet à la date et avec les modifications et conditions (y compris en ce qui concerne la cessation de leur application) fixées d'un commun accord par les Etats contractants par un échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.

2. A moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement, la dénonciation de la présente Convention par l'un d'entre eux en vertu de l'article 31 met fin à l'application de ses dispositions, dans les conditions prévues audit article, sur tout le territoire auquel elles auraient été étendues conformément au présent article.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 30. ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention est soumise à ratification et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne le plus tôt possible.

2. La présente Convention entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliquent :

En Espagne : Aux impôts exigibles pour l'exercice commençant le 1^{er} janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou à une date ultérieure;

Au Portugal :

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants devenant exigibles à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou à une date ultérieure;

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus reçus à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou à une date ultérieure.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les dispositions de l'article 8 concernant les entreprises de navigation aérienne s'appliquent aux impôts assis sur les revenus reçus à partir du 1^{er} janvier 1963.

Article 31. DÉNONCIATION

La présente Convention demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique moyennant un préavis d'au moins six mois avant la fin de l'année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de s'appliquer :

En Espagne : Aux impôts exigibles pour l'exercice commençant le 1^{er} janvier de l'année suivant le dépôt du préavis de dénonciation ou à une date ultérieure;

Au Portugal :

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants devenant exigibles à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant le dépôt du préavis de dénonciation ou à une date ultérieure;

b) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus reçus à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant le dépôt du préavis de dénonciation ou à une date ultérieure.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, signent la présente Convention.

FAIT À MADRID, le 29 mai 1968, en double exemplaire, en espagnol et en portugais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
espagnol :

[Signé]

FERNANDO MARÍA CASTIELLA

Pour le Gouvernement
portugais :

[Signé]

LUIS DA CÂMARA PINTO-COELHO